

CLAUDIO CERDA SANTANDER

La severa crisis financiera que golpea a distintos planteles de educación superior ha obligado, al cierre del año, a desvinculaciones de personal, como parte de ajustes presupuestarios.

El caso más reciente corresponde a la Universidad de Antofagasta (UA). “Una de las decisiones más difíciles de tomar, no obstante necesaria, ha sido la de poner término a la planta académica no regular”, comentó el rector Marcos Cikutovic.

La brecha entre ingresos y costos del proceso formativo figura como una de las causas de las determinaciones adoptadas para asegurar la sostenibilidad, pues registra pasivos por unos \$28 mil millones. En medio del complejo escenario, los alumnos comenzaron el lunes una toma, tras el despido de 223 docentes.

En tanto, desde el 18 de noviembre la U. de La Frontera (UFRO), también estatal, vive un paro tras masivas desvinculaciones, debido a una merma en sus ingresos de \$38 mil millones. De hecho, el lunes los profesores marcharon por el centro de Temuco, pues serían 298 los despidos, mientras que un grupo de decanos solicitó la salida del rector y su equipo.

Y más al sur, en la U. de Magallanes se concretó la salida de 36 funcionarios por un “escenario financiero adverso”.

Esta realidad no solo afecta a instituciones estatales. Por ejemplo, la U. Austral —de la red G9 de universidades públicas no estatales— también ha tenido protestas por sus pérdidas, y se estima que incluso podría haber 300 nuevas desvinculaciones a fin de año.

Asimismo, la universidad privada Alberto Hurtado prescindió de 55 funcionarios en julio, por sus problemas económicos. En ese momento, mediante una carta, el rector Cristián del Campo comentó que “hoy el sistema de educación superior enfrenta desafíos complejos en su modo de financiamiento, sobre todo en aquellas instituciones como la nuestra, que se ha comprometido con una formación de excelencia para estudiantes que, en su mayoría, estudian con gratuidad y son primera generación en sus familias en acceder a la educación superior”.

Reparos a administración de planteles

José Miguel Salazar, superintendente de Educación Superior, afirma que varios planteles hoy enfrentan una situación comple-

Según superintendencia, 11 planteles tienen un perfil “alto” de riesgo financiero:

Problemas de gestión y efectos de gratuidad obligan a universidades a despidos y ajustes presupuestarios

Esta semana, la U. de Antofagasta desvinculó a 223 profesores y los alumnos iniciaron una toma. Según los expertos, en las instituciones ha habido abultamiento de planillas, pero la fijación de los aranceles también ha impactado los ingresos.



En la U. de Antofagasta se decidió desvincular a más de 200 académicos. Los estudiantes, en plena época de exámenes, iniciaron una toma.



ja. “Estos problemas responden a contextos generales, pero también a situaciones particulares. En cuanto a los factores comunes, lo primero que se debe señalar es que el crecimiento de la matrícula en el sector se está estancando, y eso implica que los ingresos asociados a las constantes alzas de estudiantes que el sistema estaba acostumbrado a recibir por este ítem ya no son tan significativos”.

Añade que “hemos identifica-

do a instituciones que están con un nivel de deuda de corto plazo más o menos significativo”, que están reconvirtiendo a largo plazo, lo que puede empeorar sus condiciones de operación.

En esa línea, dice que se debería analizar la necesidad “de avanzar a una mayor profesionalización de la gestión administrativa institucional y financiera de las instituciones, la que, a modo de ejemplo, se ha reflejado en un

crecimiento inorgánico de las planillas de administrativos y académicos”.

Salazar remarca que “el sector recibe muchos recursos, pero no estamos tan claros en cuanto a que, en algunos casos, la gestión estratégica y la gestión del gasto tengan el nivel de sofisticación necesario para administrar profesionalmente los mayores recursos que las universidades están recibiendo”.

“Consideramos importante analizar la necesidad de avanzar a una mayor profesionalización de la gestión (...) que, a modo de ejemplo, se ha reflejado en un crecimiento inorgánico de las planillas de administrativos y académicos”.

JOSÉ MIGUEL SALAZAR
SUPERINTENDENTE DE ED. SUPERIOR

“Puede ser que una razón que explique una situación financiera más compleja esté relacionada con la gratuidad, que ha implicado en términos prácticos un menor aporte a estas instituciones”.

JUAN EDUARDO VARGAS
VICERECTOR ACADÉMICO DE U. FINIS TERRAE

También detecta problemas de gestión Juan Eduardo Vargas, ex-subsecretario de Educación Superior. “Con respecto a las universidades del Consejo de Rectores (CRUCH), creo que la principal causa que lleva a una situación compleja desde el punto de vista financiero es un problema en la gestión. Porque en términos generales, si revisas los ingresos que tienen estas instituciones, los cuales provienen no

solamente por los aranceles que provee la gratuidad, sino también por una serie de otros ingresos que el Estado les entrega directamente, puedes concluir que sus ingresos son suficientes como para tener una situación relativamente holgada”, dice.

Fijación de aranceles

Asimismo, el también vicerector académico de la U. Finis Terrae puntualiza que, en el caso de otros planteles, “la gratuidad estudiantil ha incidido en escenarios financieros más complejos, a lo que se agregan los nuevos aranceles regulados (que se pagan por alumnos con gratuidad) que han impactado de manera adversa, especialmente en las universidades privadas”.

“La gratuidad es un porcentaje muy relevante de los ingresos. Puede ser que una razón que explique una situación financiera más compleja esté relacionada con la gratuidad, que ha implicado en términos prácticos un menor aporte a estas instituciones”, observa.

Vargas profundiza que “acceder a la gratuidad tiene beneficios para la institución y costos”. Entre los beneficios, dice, está que el plantel es más “atractivo” para el estudiante, pero en el lado negativo están las restricciones que se imponen, como el límite de crecimiento de la matrícula y la fijación de los aranceles.

En la misma línea, el director del Instituto de Políticas Públicas de la U. Andrés Bello y exministro de Educación, Raúl Figueroa, apunta que “la fijación de aranceles que sirve de sustento a la política de gratuidad implica déficits que para algunas instituciones son muy difíciles de abordar. Dicha realidad se advirtió en su momento y debe ser considerada para el debate actual del proyecto de Financiamiento a la Educación Superior (FES, que reemplazaría al CAE), que no hace más que acelerar las mismas dificultades para todo el sistema”.